

INFORME COMPLEMENTARIO PARA LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “CENTRO DE ATENCION TEMPRANA Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES LOS MESEJO” (CTA LOS MESEJO)” A TRAMITAR MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

Se ha recibido en esta Dirección General el informe preceptivo del Servicio Jurídico de la Consejería de Sanidad, de 8 de noviembre de 2024, para la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el contrato de servicios denominado **“CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “CENTRO DE ATENCION TEMPRANA Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES LOS MESEJO” (CTA LOS MESEJO)”** a tramitar mediante el procedimiento abierto con pluralidad de criterios (A/SER-039041/2024).

En dicho informe, que analiza el proyecto del PCAP que les fue remitido, por parte del Servicio Jurídico *“Se informa favorablemente el pliego de referencia, sin perjuicio de las consideraciones esenciales y demás observaciones contenidas en el cuerpo del presente informe.”*, y se propone la justificación, motivación, y modificación del contenido de ciertos apartados de la cláusula 1 de dichos pliegos.

De conformidad con las recomendaciones reflejadas en dicho escrito, y con objeto de continuar con la tramitación de este expediente de contratación, se elabora el presente informe, que completa y matiza la información reflejada en la documentación preparatoria del expediente (A/SER-039041/2024).

JUSTIFICACION DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el art 202 es obligatorio establecer al menos una de las condiciones especiales de ejecución referidas a consideraciones económicas, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental, de tipo social o relativas al empleo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado Séptimo del Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, los órganos de contratación deberán incluir, al menos, una condición especial de tipo social, medioambiental o relacionada con la innovación, siempre que esté vinculada al objeto del contrato, no sea discriminatoria y sea proporcionada y compatible con el derecho comunitario.

En cumplimiento de esta normativa, y en la medida en que el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales puedan verse afectados por la ejecución del contrato, los licitadores deberán presentar una declaración responsable donde determinen claramente la línea de actuación dirigida a la implementación de estrategias de gestión medioambiental, tal y como queda detallado en el Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde indiquen

detalladamente los planes dirigidos a la promoción del reciclado de productos vinculados con la prestación del servicio que se oferta.

Además, como la ejecución del contrato implica el tratamiento de datos personales especialmente sensibles por parte del contratista, será necesario el establecimiento de una condición especial de ejecución que haga referencia a la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

El cumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución del contrato tendrá el carácter de obligación esencial, siendo el incumplimiento de cualquiera de ellas causa de resolución del contrato de conformidad con lo señalado en el artículo 211.1.f) de la LCSP.

JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA O PROFESIONAL

La solvencia económica y financiera requerida deberá resultar proporcional al objeto del contrato, no debiendo en ningún caso suponer un obstáculo a la participación de las pequeñas y medianas empresas o de las entidades sin ánimo de lucro que suelen participar en las licitaciones a este tipo de contratos. Por tal motivo, pero teniendo en consideración que con dicha solvencia se debe acreditar la capacidad de la entidad adjudicataria para hacer frente a las prestaciones objeto del contrato, se ha establecido como solvencia económica y financiera suficiente que el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, sea igual o superior al importe correspondiente a una vez y media del valor medio anual del presupuesto del contrato.

En cuanto a la solvencia técnica o profesional de los empresarios, deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. En el caso que nos ocupa, la solvencia técnica se asocia al presupuesto de ejecución del contrato y se vincula con el objeto del contrato, estableciéndose en el PCAP que se entenderá acreditada, de acuerdo con la actividad a desarrollar objeto del contrato, mediante la experiencia en la gestión de centros públicos o privados para el tratamiento de la deshabituación de pacientes con trastorno por consumo de sustancias, con autorización sanitaria y cartera de psicología clínica y/o psiquiatría de al menos cuatro puestos a jornada completa durante todo el periodo de actividad, por un importe igual o superior al 70% de la anualidad media del presupuesto del contrato y un mínimo de 600 pacientes/año.

Como concreción de las condiciones de solvencia, en el PCAP del contrato se exige a los licitadores que, además de acreditar su solvencia, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, compromiso que tendrá el carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211.

La adscripción de medios personales y materiales establecida en el PCAP como requisitos de solvencia adicionales se considera razonable, justificada y proporcional a la entidad y características de las prestaciones objeto del contrato establecidas en su PPT.

En relación con los medios materiales, se recoge en el apartado 5 del PPT los requisitos mínimos de que debe disponer el centro puesto a disposición de la entidad adjudicataria durante la prestación del servicio, para lo que se ha tenido en cuenta que el objeto del contrato consiste en la atención preventiva y temprana de adolescentes y jóvenes en proceso de desarrollar una adicción con o sin sustancias y el tratamiento para la deshabituación en los casos en que el trastorno se hubiere consolidado.

En cuanto a los medios personales, en el apartado 4 del PPT se recoge la relación de puestos mínimos de la plantilla que la entidad adjudicataria debe adscribir a la ejecución del contrato para el desempeño de las prestaciones incluidas en el PPT, para lo que se ha tenido en cuenta el horario de atención del centro de 9 a 21 horas de lunes a viernes, excepto festivos.

Esta adscripción de medios personales y materiales es similar a la que se viene exigiendo a los contratos para este tipo de centros promovidos desde el Área de Gestión de Adicciones. En este sentido se ha demostrado que ni es desproporcionada ni limita la concurrencia de licitadores ya que ha podido ser asumida por las entidades adjudicatarias.

JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

Se considera que los criterios que sirven de base para la adjudicación del contrato cumplen los siguientes requisitos:

- a) Están vinculados al objeto del contrato.
- b) Han sido formulados de manera objetiva, con pleno respecto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad y no confieren al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada.
- c) Garantizan que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva, al acompañarse de especificaciones que permiten comprobar de manera fehaciente la información facilitada por los licitadores y así evaluar en qué medida las ofertas cumplen los criterios de adjudicación.

La ponderación escogida (49 % oferta económica, 51 % criterios cualitativos evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas) es conforme a lo establecido en el artículo 146 de la Ley 9/2017, en concreto: “cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación, siempre y cuando sea posible, se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características

del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las formulas establecidas en los pliegos”.

Se considera que los criterios cualitativos que sirven de base para la adjudicación del contrato garantizan que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva, al acompañarse de declaraciones responsables de las entidades licitadoras que permiten comprobar de manera fehaciente la información facilitada y así evaluar en qué medida las ofertas cumplen los criterios de adjudicación.

Entre los criterios cualitativos se han incluido criterios de adjudicación relativos a los recursos humanos que la entidad adjudicataria se compromete a adscribir a la ejecución del contrato, tanto en el número de profesionales destinados, como en su grado de especialización técnica, docencia, formación e investigación, criterios todos ellos vinculados al objeto del contrato y que incide en la calidad del servicio prestado.

El punto 4 del PPT establece la plantilla mínima con que se debe contar para prestar el servicio en las condiciones establecidas. Sin embargo, un incremento del número de profesionales destinados en el centro permitiría un reparto de la carga de trabajo que incidiría directamente en la calidad del servicio prestado, con una disminución de las listas de espera y con más tiempo disponible para el ejercicio la labor asistencial por parte de estos profesionales.

Con objeto de no limitar la libre concurrencia e igualdad en la adjudicación del contrato, a la plantilla de los profesionales se les exige la titulación necesaria mínima para la ejecución del contrato, pero se debe valorar positivamente que se disponga en el CTA de un facultativo con experiencia acreditada en el tratamiento de adicciones para el asesoramiento y apoyo técnico a los procesos clínicos y asistenciales; una mayor especialización y formación del personal incide directamente en la calidad de la prestación del servicio.

En este mismo sentido se han incluidos criterios de adjudicación relativos a la docencia, formación e investigación del personal adscrito a la ejecución del contrato. Aspectos como la docencia en las rotaciones del personal en prácticas, la participación en proyectos de investigación relacionados con el tratamiento de las adicciones, o la participación en cursos de un plan de formación continuada, inciden en el desarrollo de las carreras de los profesionales implicados, y contribuyen a su consolidación científica y técnica, lo que finalmente repercutirá en la calidad asistencial prestada a los pacientes, lo que está vinculado directamente con el objeto del contrato.

Por otro lado, es importante que la entidad disponga de un plan de formación continuada que ofrezca a los profesionales una formación que les permita la actualización en los diferentes ámbitos relacionados con su campo de intervención, formación que se dirige tanto a la mejora de competencias como al reciclaje de profesionales. El personal de estos CTA son personal externo al Sermas y no tienen

opción a la formación continuada de la Comunidad de Madrid, por lo que se considera de gran interés que el equipo de profesionales pueda disponer de un plan de formación alternativo.

Tanto para el criterio relacionado con el precio como con los relacionados con la calidad del contrato, se ha aplicado una fórmula que permite un reparto proporcional de puntos en función de las ofertas presentadas.

En cuanto al criterio que se ha de tomado en consideración para determinar cuándo nos encontramos ante una oferta incurso en presunción de anormalidad, se valora únicamente el criterio precio dada la discrecionalidad de ofertar el resto de los criterios cualitativos de valoración, que de no ser ofertados no le impide al licitador prestar el servicio objeto del contrato en condiciones de normalidad.

JUSTIFICACION DE NO DISTRIBUIR EN LOTES DEL CONTRATO

La atención sanitaria del objeto del contrato constituye una unidad operativa y funcional en la que los distintos servicios asistenciales que se prestan están orientados a una misma finalidad, no permitiendo su fraccionamiento en lotes con el fin de ofrecer una mayor eficacia y eficiencia en la ejecución y continuidad del tratamiento.

ACLARACIÓN DE LOS COSTES EN GASTOS CORRIENTES QUE MANIFIESTAN TENER ALGUNA DE LAS EMPRESAS QUE PRESTAN ESTE TIPO DE SERVICIO EN LA ACTUALIDAD.

En la memoria económica del expediente se añadirá el siguiente párrafo referido a los gastos corrientes en bienes y servicios para la ejecución del contrato.

“Se ha consultado por este tipo de costes a entidades que actualmente son las prestadoras del servicio en los contratos para la gestión de algunos de los CTA de la Comunidad de Madrid, como son el GRUPO DE EXPERTOS EN TERAPIA Y REHABILITACIÓN, S.A., la ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA y ÁTICA SERVICIOS DE SALUD, S.L.; y se ha comprobado que la media de los importes facilitados (226.085,00€, 260.394,00€ y 203.300,00€) se ajusta a la estimación realizada”

RAZONES QUE MOTIVAN LA CESIÓN DEL CENTRO PARA EJECUTAR EL CONTRATO Y OBSERVANCIA DE LAS LAS PREVISIONES RECOGIDAS EN EL ART 312.f) de la LCSP

Para la prestación del servicio, inicialmente el Servicio Madrileño de Salud cederá a la entidad adjudicataria el Centro de Salud para el tratamiento de las adicciones, “Centro de Atención Integral a Drogodependientes Los Mesejo” (en adelante CAID Los Mesejo), situado en la C/ Los Mesejo nº 9, 28007 Madrid. Actualmente el servicio se

está prestando a plena satisfacción en este centro y es necesario darle continuidad manteniendo su localización geográfica de cara a conservar la fidelización de los pacientes y la concurrencia a la licitación de entidades que puedan prestar el servicio y que no dispongan de un centro propio de estas características.

En este centro se desarrollarán única y exclusivamente las prestaciones objeto del contrato por lo que dicho servicio se efectuará en dependencias diferenciadas de las que la propia Administración contratante dispone para la prestación directa de su actividad asistencial.

No obstante, se podrá reubicar la prestación del servicio en otro centro si se considerara necesario por la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato, respetándose, en este caso, las previsiones dispuestas en el art. 312.f) de la Ley de Contratos del Sector Público.

JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Durante la ejecución del contrato, no garantizar de forma expresa la reparación de los daños que puedan sufrir las personas o las cosas, de modo muy especial las que constituyan el objeto mismo de la prestación, puede tener consecuencias negativas en la continuidad y seguridad de la asistencia a los pacientes, y por este motivo se entiende que está suficientemente justificada la necesidad de que el adjudicatario del contrato cuente con un seguro para cubrir la responsabilidad civil sobre los daños causados durante la prestación del servicio en las personas o en los bienes muebles e inmuebles objeto de la actividad contratada.

Las coberturas del seguro de responsabilidad civil que se pretende contratar, y sus límites económicos por siniestro, son los que se exige al contrato actualmente en vigor, y al que el nuevo contrato debe dar continuidad. En este sentido se han demostrado que ni son desproporcionados ni limitan la concurrencia de licitadores, ya que han podido ser asumidos por la entidad adjudicataria. Por otro lado, para determinar el presupuesto base de licitación del nuevo contrato, como se describe en la memoria económica del expediente, se han tenido en cuenta los costes de carácter general que para la ejecución del contrato soportan estas entidades, costes entre los que se encuentra el del seguro de responsabilidad civil requerido.

PROPUESTA PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CLÁUSULA 1 DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

De conformidad con las recomendaciones reflejadas en el informe del Servicio Jurídico, se proponen las siguientes modificaciones en la Cláusula 1 del PCAP.

Apartado 3

El párrafo tercero de este apartado relativo a los medios para la prestación del servicio tendrá la siguiente redacción:

“El Servicio Madrileño de Salud cederá un centro necesario para el desarrollo del este servicio. Inicialmente el servicio se prestará en el “Centro de Atención Temprana y Tratamiento de Adicciones Los Mesejo”, situado en la C/ Los Mesejo nº 9 de Madrid (28007). No obstante, se podrá reubicar la prestación del servicio en otro centro si se considerara necesario por la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato, respetándose, en este caso, las previsiones dispuestas en el art. 312.f) de la Ley de Contratos del Sector Público”

Apartado 7

Se eliminará el término “nominal” del último párrafo de este apartado, quedando la siguiente redacción:

“Este compromiso, que tendrá el carácter de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el artículo 211 para el caso de que se incumpla por la entidad adjudicataria, se acreditará mediante una declaración responsable del representante legal de la empresa, en la que se comprometa a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales establecidos como necesario para la ejecución de los servicios objeto del contrato en los apartados 4 y 5 del PPT, relacionando todo el personal establecido como necesario en el apartado 4 del PPT para la ejecución de los servicios objeto del contrato, con indicación de su titulación homologada, formación específica y experiencia profesional.”

Apartado 21

La infracción muy grave que establece:

- “Y en todo caso, se entenderá como infracción muy grave toda ejecución defectuosa del contrato que impida su ejecución o que suponga el incumplimiento de las condiciones esenciales de la ejecución del mismo.”

Será sustituida por:

- “Y en todo caso, se entenderá como infracción muy grave toda ejecución defectuosa del contrato que impida su ejecución.”

Apartado 26

Este apartado se completará con la previsión recogida en el art 130.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, para lo que se propone la siguiente redacción.

“Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el contratista tendrá la obligación de responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.”

LA DIRECTORA GENERAL ASISTENCIAL DEL SERMAS

Firmado digitalmente por: QUINTANA MORGADO ALMUDENA
Fecha: 2024.11.13 08:47

Fdo.: Almudena Quintana Morgado